

Interior acelera un plan para reformar los centros de internamiento y aumentar plazas

La Dirección General de la Policía ultima un proyecto para mejorar la habitabilidad de los CIE tras las «graves deficiencias» denunciadas

■ JUAN CANO

MÁLAGA. La oleada de pateras que están llegando estos días a las costas andaluzas –la última arribó ayer mismo a la playa de Benjarafe– ha puesto en evidencia, entre otros fallos del sistema, el colapso de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y las deficiencias que algunos de ellos presentan.

Fuentes del Ministerio del Interior, del que dependen estas instalaciones, han asegurado a SUR que la Dirección General de la Policía está trabajando en un plan integral,

que evidentemente se ha visto acelerado por las circunstancias, para realizar reformas y trabajos de mejora de la habitabilidad en los CIE.

A finales de diciembre, el Consejo de Ministros ya aprobó una contratación de obras de emergencia por valor de 236.000 euros para reparar deficiencias en el centro de Aluche (Madrid), donde medio centenar de inmigrantes se amotinaron el pasado mes de octubre para protestar por sus condiciones de vida y otros 13 se fugaron en noviembre.

Aunque no han facilitado detalles sobre presupuesto o plazos de ejecución de este plan integral, las fuentes sí precisaron que el proyecto también conllevará un aumento del número de plazas disponibles para evitar que la saturación de los centros provoque situaciones como la que se está dando estos días. Desde el miércoles, la policía ha dejado en liber-

tad, a cargo de ONG, a todos los inmigrantes llegados a Málaga en pateras al no haber capacidad para su internamiento, lo que a juicio del Colegio de Abogados supone un trato discriminatorio respecto a los extracomunitarios que, por ejemplo, vinieron en diciembre, la mayoría de los cuales aún continúan retenidos.

El Gobierno mantiene abiertos siete centros de internamientos (aunque alguno esté cerrado temporalmente por reformas) con un total de 1.440 plazas. Cinco de estos CIEs se encuentran en la Península, concretamente en Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y por último Algeciras (del que depende el anexo de Tarifa). En los últimos tiempos, el de Zapadores, en Valencia, ha estado cerrado por obras y, después, por una plaga de chinches que motivó una protesta de la plataforma 'CIE no', que pide su clausura al considerarlos «au-

ténticos guantánamos europeos». Los otros dos están en Canarias; en el de Barranco Seco, en Las Palmas, las propias trabajadoras solicitaron el cierre por la situación «deficiente» de las infraestructuras, que fue precisamente lo que motivó, en junio de 2012, la clausura definitiva del CIE de Capuchinos, en Málaga.

El complejo de Algeciras y Tarifa, el segundo con mayor número

de plazas (234), sólo por detrás del de Aluche (280), es el que recibe los internamientos ordenados por los juzgados de Málaga. Ayer, SUR adelantó el durísimo auto redactado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, Belén Barranco, en el que denuncia las «graves deficiencias» en sus instalaciones. La magistrada, que visitó los centros de Algeciras y Tarifa en octubre y noviembre, no ahorra adjetivos para describir lo que vio: «Deplorables, claustrofóbicos, absolutamente masificados o más propios del régimen carcelario».

La jueza detalla, entre otros muchos aspectos, la falta de luminosidad, de espacios lúdicos o de lavandería para la ropa; la presencia de rejillas y candados en las puertas; o un «boquete en el suelo recubierto de aluminio donde defecar y miccionar» a la vista del resto de internos.

El Gobierno mantiene abiertos siete centros, cinco de ellos en la Península, con 1.440 plazas